

Contraloría del Estado

RESOLUCIÓN.

--- Guadalajara, Jalisco, 10 diez de agosto del 2018, dos mil dieciocho.-----

--- **VISTA.-** Para resolver en definitiva el procedimiento sancionatorio 629/2014-O instaurado en contra del C. **JORGE ARMANDO ORTEGA ROMERO**, quien se desempeñó como COORDINADOR DE ANÁLISIS DEL ENTORNO en la DESPACHO DEL C. GOBERNADOR Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE APOYO, de conformidad con el siguiente: -----

RESULTANDO.

--- **PRIMERO.-** La presente causa tuvo su origen en razón de que el ex servidor público **JORGE ARMANDO ORTEGA ROMERO**, presuntamente incumplió con la obligación establecida en la fracción XXVII del artículo 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, al no presentar con oportunidad su declaración final de situación patrimonial, dentro del plazo que establece el diverso 96 fracción III de la Ley antes invocada, como se desprende del memorando número **875/DGJ/DATSP/2014**, suscrito por el Lic. Juan Ramón Rodríguez González, en ese entonces Director de Área Técnica y Situación Patrimonial, al que anexó la siguiente documentación: -----

--- 1.- Copia certificada del formato de bajas del padrón de obligados a presentar la declaración de situación patrimonial, donde se refiere la baja del C. **JORGE ARMANDO ORTEGA ROMERO**, a partir del 28 de febrero de 2013, al cargo de Coordinador de Análisis del Entorno en el Despacho del C. Gobernador y Dependencias Administrativas de Apoyo.-----

--- **SEGUNDO.-** Razón por la cual, el entonces Contralor del Estado, Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, mediante acuerdo dictado el día 24 de septiembre de 2015, determinó incoar procedimiento administrativo en contra del C. **JORGE ARMANDO ORTEGA ROMERO**, presuntamente por el incumplimiento de presentar su declaración FINAL de situación patrimonial; asimismo, a fin de desahogar el procedimiento aludido se delegó tal función al MTRO. AVELINO BRAVO CACHO, entonces Director General Jurídico de esta Dependencia, en términos de lo previsto por el artículo 87 fracción I último párrafo de la Ley Invocada, quien en uso de tales facultades, con proveído de fecha 25 de septiembre del mismo año, se avocó al conocimiento del presente asunto, por lo que con objeto de otorgar al encausado la garantía de audiencia y defensa, se le corrió traslado de los proveídos descritos con antelación, así como copias simples de la documentación que sirvió de base para la integración del presente procedimiento y que ha quedado descrita en líneas que anteceden. -----

--- Asimismo, se hizo del conocimiento del encausado, los plazos establecidos, para que rindiera su informe de contestación, y presentara las pruebas que a su derecho estimara pertinentes, habiendo sido legalmente notificado mediante oficio 3432/DGJ-C/2016 el día 03 de enero de 2017, tal y como consta en

ELABORÓ: Zuleika A. V. Rodríguez Balderas.

actuaciones, quien no hizo efectivo tal derecho, pues no presentó su informe respecto a la imputación realizada en su contra por parte de esta autoridad, mucho menos ofreció ni presentó pruebas que sirvieran para desvirtuar la falta en comentario.-----

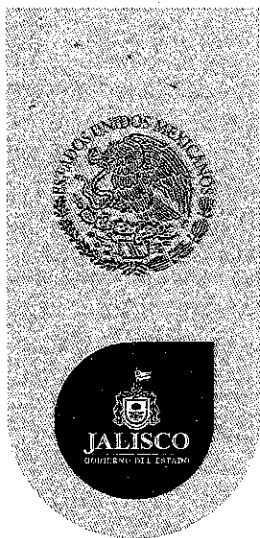
--- **TERCERO.**- Obra agregado al sumario en que se actúa, el oficio número SPJ/10-1996/2015, signado por el Lic. Giovanni Joaquín Rivera Pérez, Secretario Particular del Gobernador del Estado, a través del cual remite la información solicitada, así como la copia del último nombramiento celebrado por el C. **JORGE ARMANDO ORTEGA ROMERO.**-----

--- **CUARTO.**- Por último, con fecha 11 de julio de 2018, tuvo verificativo la audiencia de admisión y desahogo de pruebas, así como expresión de alegatos, a la que no asistió el C. **JORGE ARMANDO ORTEGA ROMERO**, no obstante de haber sido enterado y notificado legalmente del desahogo de la misma mediante oficio DGJ-C/1680/2018, el día 05 de julio de este mismo año; en consecuencia, desahogadas que fueron las distintas etapas del procedimiento incoado conforme lo previsto en el artículo 87 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y no habiendo diligencia pendiente por practicar, se ordenó traer los autos a la vista de la suscrita Titular de la Contraloría del Estado, para dictar la resolución que en derecho corresponda, misma que hoy se pronuncia de conformidad con los siguientes:-----

CONSIDERANDOS

--- **PRIMERO.**- Esta Contraloría del Estado, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo previsto por los artículos 90, 91 fracción III, 92, 106 y 107 de la Constitución Política del Estado; 3 fracción I, 5 fracción VIII, 6 fracción IV, 35, 38 fracciones VI, VII y XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en relación con el numeral 1, 2, 3 fracción VIII, 4, 61 fracción XXVII, 62, 64, 65, 67 fracción II, 68, 71, 72 fracción II, 87, 93 fracción II inciso h), e i); 96 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco; así como los transitorios Primero y Segundo fracción I, de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, publicada en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" el 26 de septiembre de 2017, mediante decreto 26432/LXI/17, expedido por el Congreso del Estado de Jalisco, que establece que los procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del citado decreto, continuarán desahogándose y serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables al momento del inicio del procedimiento; asimismo, los procedimientos y faltas administrativas previstas por la Ley que se abroga, continuarán vigentes hasta en tanto se concluyan los procedimientos correspondientes.-----

--- **SEGUNDO.**- Con relación al procedimiento administrativo incoado en contra del C. **JORGE ARMANDO ORTEGA ROMERO**, esta autoridad considera que los medios de prueba existentes en actuaciones, resultan aptos y suficientes para acreditar el hecho irregular imputado en contra del encausado, consistente en la



omisión de presentar su declaración final de situación patrimonial dentro del término previsto por el artículo 96 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, el que establece:-----

Artículo 96. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

III. La final, dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del encargo”;

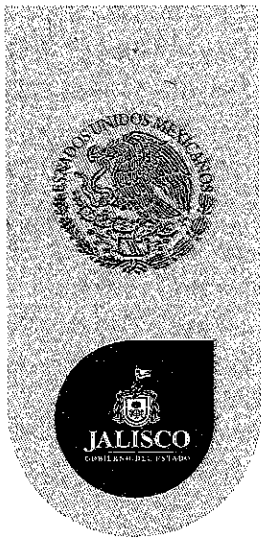
-- Lo anterior es así, en virtud de que el **C. JORGE ARMANDO ORTEGA ROMERO**, el día 28 de febrero de 2013, causó baja al puesto que venía desempeñando como COORDINADOR DE ANÁLISIS DEL ENTORNO en el DESPACHO DEL C. GOBERNADOR Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE APOYO, como queda demostrado con los medios de cargo que se allegaron al sumario, como lo es la copia certificada del formato de bajas del padrón de obligados a presentar la declaración de situación patrimonial, donde se advierte la baja del encausado, documento descrito con antelación, al que se le otorga valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto por los artículos 271 y 272 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria según lo previsto por el artículo 71 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, vigente al momento de instaurarse el presente procedimiento administrativo; por lo que al realizar el cómputo del término de 30 días naturales que tenía el **C. JORGE ARMANDO ORTEGA ROMERO**, para cumplir con la obligación de presentar su declaración final de situación patrimonial, éste le feneció el día 30 de marzo de 2013, sin que el antes mencionado hubiese presentado su haber patrimonial por conclusión en el plazo de ley; no obstante que tenía pleno conocimiento que la presentación de la declaración de situación patrimonial de los servidores públicos del Poder Ejecutivo, deberá ser mediante el formato instalado en el sistema WEBDESIPA en la página de internet: <https://contedo.jalisco.gob.mx/webdesipa/index.jsp>.-----

--- Aconteciendo además que el ex servidor público **C. JORGE ARMANDO ORTEGA ROMERO**, no rindió su informe de contestación, ni aportó prueba alguna tendiente a demostrar su inocencia en cuanto a la imputación de que es sujeto, a pesar del apercibimiento que de ser omiso en los términos otorgados, se daría curso al procedimiento por sus distintas etapas de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, siendo que con tal indiferencia el encausado no ejerció su derecho de audiencia y defensa que todo gobernado tiene como medida de protección y seguridad jurídica; luego entonces al ser concatenados y valorados los documentos que sustentan la irregularidad administrativa de mérito, se acredita que el antes mencionado, quebrantó lo dispuesto por el artículo 61 fracción XXVII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, el que dispone:-----

Artículo 61. Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y sin perjuicio de sus

ELABORÓ: Zuleika A. V. Rodríguez Balderas.

CE.JALISCO.GOB.MX



Contraloría del Estado

derechos y obligaciones laborales, tendrá las siguientes obligaciones:

XXVII.- Presentar con oportunidad y veracidad la declaración de situación patrimonial ante los organismos competentes, quienes estén obligados a ello en los términos que señala esta ley;

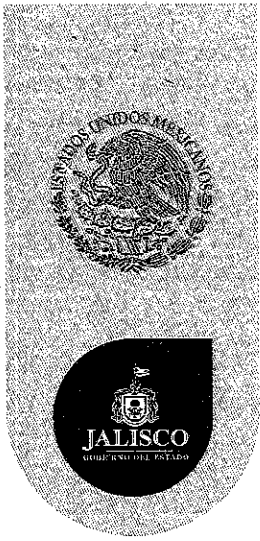
--- Aunado a lo anterior, es pertinente señalar que en términos del artículo 113 de la Constitución Federal vigente al momento de la comisión de la conducta sancionable por parte del encausado, la teología del régimen jurídico relativo a la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, es la preservación de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones de dichos servidores públicos, en beneficio inmediato de la actividad integral del Estado. La ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, reglamentaria del artículo constitucional indicado, persigue a través de esa tabla axiológica, una prestación óptima de los servicios públicos por parte de las personas físicas encargadas de tal cometido, tanto desde el punto de vista jurídico (legalidad), como moral (honradez, lealtad, imparcialidad); y material, (eficiencia). Uno de los instrumentos técnicos jurídicos delineados por el legislador para asegurar la obtención del "desiderátum" apuntado, se encuentra establecido en el título sexto, capítulo único de la citada ley ordinaria y es el que se refiere al registro patrimonial de los servidores públicos a cargo de esta Contraloría del Estado, particularmente en el artículo 94 fracción I, dicho registro permite conocer las fluctuaciones en el patrimonio de los servidores públicos; y, en su caso, advertir signos exteriores de riqueza ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudiera tener, de ahí la importancia y la trascendencia de cumplir con la citada obligación. -----

--- Motivo por el cual, al ser **omiso** en la presentación de su declaración final de situación patrimonial, en el término de 30 días naturales que para tal efecto establece el artículo 96 fracción III de la Ley antes invocada; luego entonces tal conducta que se le imputa, además de quebrantar los arábigos antes señalados, encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 98 de la Ley de referencia vigente hasta el 31 de diciembre de 2013; que textualmente dice: -----

Artículo 98.- En caso de incumplimiento de la obligación contenida en la fracción III del artículo 96, se instaurará el procedimiento a que alude el artículo 87 de este ordenamiento, pudiendo sancionarse al servidor público omiso con inhabilitación hasta por dos años para el desempeño de cargos públicos. En caso de subsistir la falta de presentación, la inhabilitación continuará indefinidamente hasta el momento en que se subsane la omisión".

--- **TERCERO.-** Por lo que a fin de determinar la sanción a imponer en contra del **C. JORGE ARMANDO ORTEGA ROMERO**, esta autoridad toma en cuenta lo que dispone el artículo 89 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco,

ELABORÓ: Zuleika A. V. Rodríguez Balderas.



Contraloría del Estado

vigente al momento de iniciar el presente procedimiento, en los términos siguientes: -----

--- En cuanto a la **fracción I** como lo es **la gravedad** de la falta.- En concepto de quien resuelve, se estima REVISTE GRAVEDAD, toda vez que el legislador estatal, previó que con objeto de transparentar los ingresos lícitamente obtenidos por quienes se desempeñan en el servicio público, fueran objeto de revisión para evaluar la evolución patrimonial de los que se encuentran en tal supuesto, con objeto de detectar incrementos que no sean acordes con las percepciones lícitas de aquellos, aunado a lo ya esgrimido con antelación.-----

--- Asimismo, al tener en consideración la **fracción II** como lo es **la condición socioeconómica**, ésta se considera de nivel MEDIO; ya que, por el cargo desempeñado como COORDINADOR DE ANÁLISIS DEL ENTORNO, percibía un sueldo mensual por la suma de \$27,627.00 (veintisiete mil seiscientos veintisiete pesos 00/100 moneda nacional) como se desprende del informe rendido por la autoridad y descrito en el resultando número tres de la presente resolución. -----

--- Por lo que respecta a la **fracción III**, como lo es el **nivel jerárquico, los antecedentes y la antigüedad en el servicio**, del informe rendido por la DESPACHO DEL C. GOBERNADOR Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE APOYO, a través del oficio **SPJ/10-1996/2015**, se desprende que el encausado ingresó al servicio el día 06 de enero de 2009, lo que le permitía distinguir la responsabilidad de presentar su declaración de situación patrimonial, que como deber le eran inherentes en el cargo desempeñado.-----

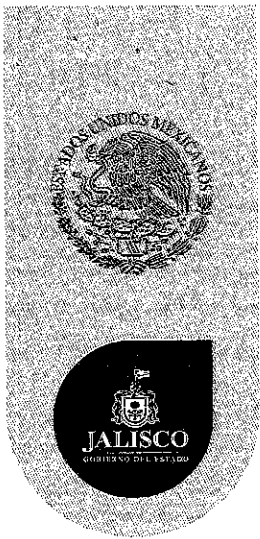
--- En cuanto a los medios de ejecución prevista en la **fracción IV** del dispositivo jurídico que nos ocupa, se desprende que existe **negligencia** del encausado, ya que hasta la fecha no ha cumplido con la citada obligación. -----

--- En lo relativo a la **fracción V** del dispositivo y ordenamiento jurídico citado, el aludido ex servidor público, cuenta con una sanción consistente en amonestación por escrito por la extemporaneidad de la presentación de la declaración ANUAL de situación patrimonial, adjuntando impresión de la constancia de **no sanción administrativa**, para tal efecto.-----

--- En lo relativo a la **fracción VI**, se desprende que **no existió daño o perjuicio al erario público** por parte del encausado. -----

--- En consecuencia, y tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de la Materia vigente hasta el 31 de diciembre de 2013; el que establece que la inobservancia en la presentación de la declaración final de situación patrimonial, puede sancionarse con la inhabilitación hasta por dos años para el desempeño de cargos públicos, es por lo que resolviendo de manera justa y equitativa la presente causa administrativa, sobre la base de los razonamientos y fundamentos legales aducidos interpretados armónicamente, se impone en contra del **C. JORGE ARMANDO ORTEGA ROMERO**,

ELABORÓ: Zuleika A. Rodríguez Balderas.



Contraloría del Estado

quien se desempeñó como COORDINADOR DE ANÁLISIS DEL ENTORNO en el DESPACHO DEL C. GOBERNADOR Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE APOYO, la sanción prevista en el artículo 72 fracción VI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, consistente en **INHABILITACIÓN POR EL TÉRMINO DE UN AÑO**, para desempeñar empleo, cargo o comisión en la administración pública, debiendo subsistir la inhabilitación indefinidamente, si transcurrido el término persiste su negativa de presentar declaración final de situación patrimonial siendo procedente asentar dicha sanción en el padrón correspondiente del Poder Ejecutivo a cargo de esta Dependencia; notificando a la Dependencia donde prestó sus servicios, para los efectos legales a que haya lugar.-----

--- Por lo que con fundamento en lo establecido por los artículos 90, 91 fracción III, 92, 106 y 107 de la Constitución Política del Estado; 3 fracción I, 5 fracción VIII, 6 fracción IV, 35, 38 fracciones VI, VII y XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en relación con el numeral 1, 2, 3 fracción VIII, 4, 61 fracción XXVII, 62, 64, 65, 67 fracción II, 68, 71, 72 fracción II, 87, 93 fracción II inciso h), e i); 96 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco; así como los transitorios Primero y Segundo fracción I, de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, publicada en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" el 26 de septiembre de 2017, mediante decreto 26432/LXI/17, expedido por el Congreso del Estado de Jalisco, que establece que los procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del citado decreto, continuarán desahogándose y serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables al momento del inicio del procedimiento; asimismo, los procedimientos y faltas administrativas previstas por la Ley que se abroga, continuarán vigentes hasta en tanto se concluyan los procedimientos correspondientes.-----

RESOLUTIVOS

--- **PRIMERO.** De conformidad con los argumentos y fundamentos de derecho aducidos en los Considerandos Primero y Segundo de esta resolución, se demostró la existencia de responsabilidad administrativa imputada en contra del **C. JORGE ARMANDO ORTEGA ROMERO**, quien se desempeñó como COORDINADOR DE ANÁLISIS DEL ENTORNO en el DESPACHO DEL C. GOBERNADOR Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE APOYO, toda vez que infringió la obligación a la que la ley le constrañe, la cual se consigna en los artículos 61 fracción XXVII y 96 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco; motivo por el cual, se impone en contra del referido, la sanción prevista en el artículo 72 fracción VI de la Ley antes invocada, consistente en **INHABILITACIÓN POR EL TÉRMINO DE UN AÑO**, para desempeñarse en la administración pública, debiendo subsistir la inhabilitación indefinidamente, si transcurrido el término persiste su negativa de presentar su declaración final de situación patrimonial, cuyo término empezará a correr y surtirá sus efectos legales al ser notificada la misma al encausado, de

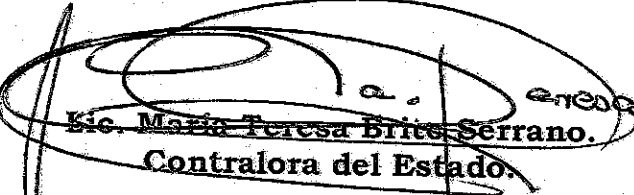
conformidad con lo dispuesto por el artículo 92 tercer párrafo de la Ley de Responsabilidades antes invocada.-----

--- **SEGUNDO.**- Notifíquese la presente resolución al encausado en el domicilio que de él se tenga registro, así como al DESPACHO DEL C. GOBERNADOR Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE APOYO, indistintamente por conducto de los servidores públicos a los cuales les fue delegada dicha responsabilidad mediante acuerdo número 03/2016 de fecha 09 de febrero de 2016, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial "EL ESTADO DE JALISCO" con fecha 18 de febrero de 2016, número 37, sección IV. -----

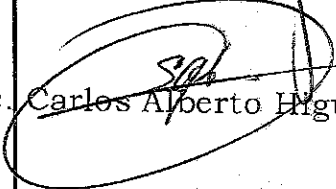
--- **TERCERO.**- Con fundamento en el artículo 8 fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, publíquese la presente resolución en el portal de transparencia de la Contraloría del Estado. -----

--- **CUARTO.**- Una vez notificado el encausado, gírese memorando a la servidora pública responsable del Registro Estatal de Inhabilitados de esta Dependencia, con la finalidad de que sea registrada la sanción impuesta para los efectos legales a que haya lugar. -----

--- Así lo resolvió la suscrita **Titular de la Contraloría del Estado de Jalisco, Lic. MARÍA TERESA BRITO SERRANO**, en unión de los testigos de asistencia con los que actúa y que firman para constancia. -----


Lic. María Teresa Brito Serrano.
Contralora del Estado.

Testigos de Asistencia.


Lic. Carlos Alberto Higuera Fragozo.


Lic. Rosa Irene Sánchez Sánchez

"2018, Centenario de la Creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"


ELABORÓ: Zulieka A. V. Rodríguez Balderas.

El presente documento contiene información clasificada como RESERVADA Y CONFIDENCIAL de conformidad a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás ordenamientos de la materia aplicables."

